

Un Estado por etapas

P

ese a que la transición política no fue ni una ruptura ni una mera continuidad, o tal vez por eso mismo, se puso entonces en marcha una evolución del Estado democrático que aún sigue avanzando. El forcejeo inicial enfrentó a quienes querían

**SALUSTIANO
DEL CAMPO ***

1978, que nunca despertó grandes entusiasmos, pero que al menos sorteó los miedos que no fue capaz de despejar. Las cincuenta y tantas leyes orgánicas que precisaba su desarrollo fijaron otros tantos vencimientos, que en su mayor parte se han cumplido y satisfecho ya.

Nunca he comulgado ni con la glorificación de ese período ni con la de ese texto. La diferencia sustancial que hay entre ambos consiste en que lo vivido no puede ya revisarse, pero la Constitución sí. Desde el primer momento fue aceptada como el resultado de una partida sin victoriosos ni derrotados, aunque nadie ignoraba sus imperfecciones. El modelo de Estado del Título VIII es muy defectuoso y ha dado origen a una discusión casi interminable, pero

« Nunca he comulgado ni con la glorificación de ese período ni con la de ese texto. La diferencia sustancial que hay entre ambos consiste en que lo vivido no puede ya revisarse, pero la Constitución sí.»

*Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. Secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y políticas.

el conjunto de su articulado ha hecho posible el más largo trecho democrático de nuestra historia y ese es su principal valor.

Una prueba heredada. Para la mayoría de los ciudadanos españoles la Constitución se asentó sobre el temor general a volver a las andadas y, en cualquier caso, todos los españoles la prefirieron a las opciones de regresión o de aventura. El susto del 23-F destacó la utilidad de la monarquía, que era uno de sus aspectos más dudosos *apriori*. Todas las piezas encajaron y se entró a los cinco años de su promulgación en la primera gran prueba de las previstas: la cohabitación sin conflictos de la monarquía con el Partido Socialista Obrero Español, cuya imposibilidad fue una de las grandes frustraciones del reinado de Alfonso XIII.

Lo que ha sido en términos sociales la larga etapa gubernamental de este partido lo ha descrito muy bien James Petras y a su dictamen me remito. No ha sido el causante de todos nuestros males, pero sus decisiones han resultado a menudo contraproducentes. Se encontró una España animada de solidaridad, ansiosa de participación y repleta de optimismo y la deja desencantada, sin un proyecto político esperanzador y con un gran pesimismo ante el futuro. El Estado bajo su gobierno ha funcionado con los lastres de la corrupción y del favoritismo clientelar y la gente se ha replegado hacia la familia y las redes de parientes y amigos.

Nos hemos incorporado a la Europa política, pero el coste para el español medio ha sido alto. No tenemos la voz que corresponde a un país de nuestra talla y no solamente hemos arrancado viñas y sacrificado parte de nuestra cabana, sino que hemos arruinado del todo a nuestra Universidad y marginado en el paro a nuestra juventud hasta un extremo suicida. Este juicio, aparentemente tan severo, se limita a reflejar la realidad. El sistema de bienestar familiar que los jóvenes viven "se basa en la prosperidad y ahorros del pasado", según Petras.

Para quienes nunca hemos sobrevalorado la transición y en su día expresamos nuestra desconfianza de la clase política emergente, la sorpresa ha sido menor, pero el daño ha resultado idéntico. A pesar de ello, nos asombra la manera como los ex jóvenes sesentayochistas se han desembarazado de su equipaje de sueños y lo han sustituido por la especulación económica y la intolerancia, porque la cultura política autoritaria del felipismo no ha perseguido ilustrar, sino fomentar el conformismo.

«El Estado bajo su gobierno ha funcionado con los lastres de la corrupción y del favoritismo clientelar y la gente se ha replegado hacia la familia y las redes de parientes y amigos.»



En estas condiciones, el Estado ha retrocedido. Funciona peor que antes y todos los resortes de control interno aparecen violentados, en el Congreso de los Diputados como en la justicia. El tramo político posterior a 1993 se ha recorrido a lomos del nacionalismo pujolista y con mucha más pena que gloria. Se ha cumplido una fase socialista bajo la monarquía, pero su huella no es precisamente luminosa, sino más bien al contrario.

Dos pruebas a la vez. Al final de este camino, además, nos hemos topado con dos pruebas y no con una como suponíamos. Antes de las decisivas elecciones del tres de marzo del presente año se temía que los socialistas no abandonaran el poder tan pacíficamente como lo alcanzaron y, a primera vista, no ha sucedido así ni lleva trazas de que eso pase, pero ahora todavía no es posible referirse a la totalidad del proceso hacia la alternancia. No hay datos para calcular las minas sembradas en la burocracia estatal y en las empresas públicas, pero nadie puede negar que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, yace descompuesto y sin prestigio.

Por otro lado, los resultados electorales nos han enfrentado con una necesidad cuyo tiempo no se suponía tan cercano. Nacionales y nacionalistas tienen que ponerse de acuerdo, amenazados como están por unas nuevas elecciones que nunca repetirían la actual situación favorable. En cierto modo, es lo mejor que podía pasar, a la vista de ese 47 por ciento de votos obtenido por el conjunto del centro derecha. Como, además, su apoyo procede de los sectores urbanos y profesionales, su futuro promete más que el que a la izquierda garantizan los pensionistas y subsidiados.

Ha llegado así la hora de sentarse a discutir otra vez el diseño del Estado, pero con la ventaja adquirida de una experiencia democrática de cuatro lustros y con el inconveniente de que falta la predisposición al consenso que existía en la segunda mitad de los años setenta. Todas nuestras contradicciones, temores y anhelos están sobre la mesa y parece llegado el momento de saber no quién es cada cuál, como al empezar la transición, sino lo que de verdad reclama para sí. Lo más notable que se palpa estos días, sin embargo, es la falta de angustia en la población, que abunda en el convencimiento de que al final se logrará un pacto de gobierno y se abrirá un período hábil para forjar la España del siglo XXI. La pena es que, como sucedió hace veinte años, se carece también de una verdadera guía intelectual par tan importante empeño, porque la Administración única y otras sugerencias similares son propuestas útiles pero insuficientes.

«Nos asombra la manera como los ex jóvenes sesentayochistas se han desembarazado de su equipaje de sueños y lo han sustituido por la especulación económica y la intolerancia, porque la cultura política autoritaria del felipismo no ha perseguido ilustrar, sino fomentar el conformismo.»



El postfranquismo en el que acabó cayendo la cultura política autoritaria del felipismo, tiene obligatoriamente que resignarse ante la necesidad de establecer acuerdos para esta nueva fase. Ahora sobre el modelo de Estado y sabiendo cada cual qué cartas tiene. Bien es verdad que para los protagonistas se trata de un juego nunca ensayado, porque los nacionales no han renunciado todavía a organizar y gestionar el país desde el centro y los nacionalistas, si bien excluyen por el momento un escenario de independencia, no renuncian a tensar la cuerda y a obtener contrapartidas múltiples.

Desde fuera se anticipa malamente cómo Pujol puede al fin descubrir lo que ambiciona para Cataluña y para él y cómo Aznar se las arreglará para reconocer "hechos diferenciales" varios sin perjudicar la igualdad entre las Comunidades Autónomas y, por consiguiente, sin ofender a las de segunda clase. Tal vez por eso el pacto no se alcanzará de una vez, sino que simplemente se darán los pasos iniciales de un proceso largo, pero este quedará abierto.

La sociedad española aparece hoy madura y estable y las dos fuerzas políticas principales continúan siendo su mejor garantía. El PSOE y el PP suman entre ambos 297 diputados y, por lo tanto, se dispone de una alternativa practicable. Las derechas nacional y nacionalista están forzadas a entenderse y, cuando lo consigan, España se habrá hecho aun más sólida, porque lo que verdaderamente es capaz de disipar cualquier miedo es la *última ratio* de una alianza de socialistas y populares frente a la amenaza de disolución de la unidad que ampara la Constitución. Las circunstancias son favorables para un nuevo proyecto de Estado, pero éste no consiste solamente en deshacer porque hoy la sociedad española es mucho más diversa y rica en todos los sentidos que en cualquier otro tiempo y, la nueva tarea constituyente requiere a la vez la catalanización de España y la españolización de Cataluña. Ambos proyectos exigen para ser viables el abandono de las posturas más extremas y egoístas. Pero no como el fruto dorado de una convicción moral, aunque algo de ella tenga que haber, sino como el producto de dos sistemas de intereses que buscan el futuro.

A modo de resumen. La que algunos califican como segunda transición está a punto de iniciarse, pero la sustitución de los socialistas por los populares no ha llegado mediante la obtención en las urnas de una mayoría absoluta o hegemónica a favor de estos últimos. La distancia en votos entre el PP y el PSOE es muy corta y, además, premonitoria de que en adelante las alternancias seguramente van a ser del mismo estilo y generalmente requerirán pactos.

«Ha llegado así la hora de sentarse a discutir otra vez el diseño del Estado, pero con la ventaja adquirida de una experiencia democrática de cuatro lustros y con el inconveniente de que falta la predisposición al consenso que existía en la segunda mitad de los años setenta.»



En muchos sentidos la oportunidad aparece como propicia para reestructurar el Estado, cuyo proyecto quedó abierto al aprobarse la Constitución. Hoy esto puede hacerse sin miedo, pero precisa el consenso de las actuales comunidades autónomas y por tanto trabajarlo mucho. Es posible lograr para el año 2000 una CEDA que funcione y entrar en el nuevo siglo con una España organizada de un modo más flexible y con mayor capacidad de adaptación, pero no cabe descartar que la ocasión se malogre, en especial por la ambición desmedida de los nacionalistas catalanes y vascos.

En ese desgraciado caso, la solución tendría que obtenerse a través de la colaboración entre las únicas fuerzas con respaldo para reconstruir el Estado a partir de otras premisas, que son también legítimas y seguras. Después de todo, la democracia es un sistema de mayorías y ni siquiera en sus regiones respectivas las disfrutaban Pujol y Arzallus.

«La sociedad española aparece hoy madura y estable y las dos fuerzas políticas principales continúan siendo su mejor garantía. El PSOE y el PP suman entre ambos 297 diputados y, por lo tanto, se dispone de una alternativa practicable.»

